



Global Health Watch 6. In the shadow of the pandemic - ES

Introducción

Hace 21 años, en el año 2000, unos 1.500 activistas de la salud procedentes de 75 países y representantes de decenas de movimientos de la sociedad civil se reunieron en una Asamblea Popular de la Salud en Savar (Bangladesh) para movilizar un nuevo movimiento sanitario mundial que permitiera alcanzar el objetivo inscrito en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS): "el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social". La Asamblea elaboró una Carta de los Pueblos para la Saludⁱ en la que se nombraban "la desigualdad, la pobreza, la explotación, la violencia y la injusticia" como los principales motores de la mala salud, e inició una campaña mundial de promoción en torno al tema aspiracional de "Salud para todos". La Asamblea también inició el proceso de organización para crear un *Observatorio Mundial de la Salud* como complemento más crítico y progresista de los Informes sobre la Salud en el Mundo de la OMS (que entonces se publicaban anualmente).

El primer *Observatorio* apareció en 2005, iniciando una crítica al fracaso de la globalización en cuanto a los beneficios prometidos para la salud y la riqueza que sigue siendo un hilo conductor en todas las ediciones posteriores. El *Observatorio 2* apareció en 2008, el mismo año en que se publicó el informe final de la innovadora Comisión sobre los Determinantes Sociales de la Salud (CSDH) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y justo antes de que el mundo se sumiera en el caos de la Gran Crisis Financiera. En 2011, *el Observatorio 3* pudo ahondar en las consecuencias inmediatas de esa crisis, con la esperanza de que los líderes, respaldados por las conclusiones de la CSDH y su rápida aceptación por parte de las autoridades de salud pública de todo el mundo, se detuvieran a considerar la reestructuración fundamental de la economía mundial necesaria tras su rescate público (gubernamental) del casi colapso. Lamentablemente, como lamentó el *Watch 4* de 2014, se produjo un rápido retorno de una ortodoxia económica neoliberal tóxica, ya que las élites políticas y económicas del mundo no asumieron las implicaciones transformadoras de la crisis financiera mundial. A pesar de que el neoliberalismo quedaba cada vez más expuesto como una ideología defectuosa, los políticos parecían incapaces de romper con sus ideas políticas, mientras que las élites económicas seguían ensalzándolo por los beneficios que les reportaba. Al año siguiente se alcanzaron dos acuerdos históricos que presagiaban una versión diferente del futuro: los Objetivos de Desarrollo



Sostenible (ODS), aplicables universalmente a todos los países, y el Acuerdo de París, por el que se establecían objetivos de emisión de gases de efecto invernadero para mantener la temperatura del cambio climático dentro de los límites habitables para el ser humano. Todo ello constituyó el telón de fondo del *Observatorio 5 de 2017*, que expresó cierto optimismo por un futuro más saludable, pero siguió siendo desgastantemente crítico con un orden político y económico persistente que seguía socavando las condiciones estructurales necesarias para garantizar una población humana equitativamente sana y totalmente dependiente de la sostenibilidad ecológica de un planeta amenazado.

Y así llegamos al momento actual, con esta edición de 6th de *Global Health Watch* que aparece en otra coyuntura sanitaria mundial crítica: la pandemia de COVID-19. Más que en cualquier otro periodo anterior de los más de 15 años que lleva el Observatorio evaluando el estado de la salud mundial, la pandemia ha puesto de manifiesto la profundidad de las desigualdades mundiales en el acceso a los recursos esenciales para la salud y el riesgo que esto supone para nuestra supervivencia futura. Aunque el mundo rico se ve salir tímidamente de la sombra de la pandemia, es improbable que gran parte del mundo más pobre lo haga durante otros dos o más años, o incluso mucho más. Como en todas las ediciones anteriores, la información y los análisis de *Reloj 6* siguen enmarcados en una visión de un mundo y una sociedad humana más justa, más igualitaria, más humana y más respetuosa con nuestras responsabilidades ecocéntricas hacia todos los demás seres vivos que comparten nuestro frágil hogar. Como en todas las ediciones anteriores, también comienza con una sección sobre "La arquitectura política y económica mundial", en la que se establecen conexiones entre la política y las políticas a nivel mundial y nacional y lo que significan para el mundo que imaginamos. La segunda sección del *Observatorio* se centra en los "Sistemas de salud", extrayendo lecciones para las reformas que la pandemia hace más urgentes. La tercera sección se extiende "Más allá de la atención sanitaria" para abordar varios determinantes sociales y medioambientales críticos de la salud, con implicaciones políticas que afectan a múltiples sectores públicos y privados. La última sección, "Vigilancia", hace un repaso crítico del estado de la gobernanza mundial de la salud, centrándose en varias instituciones clave.

Concluimos este *Observatorio* con un grito de guerra para los activistas de la salud de todo el mundo. No pretendemos que las tareas para lograr un mundo equitativo y sostenible en materia de salud sean fáciles de llevar a cabo, pero el libro destaca muchos puntos de apoyo en los que los activistas podrían participar de forma útil. Y hay indicios de que, a pesar del aumento



de la represión autocrática, no ha disminuido la sed de cambio transformador de los activistas.

La arquitectura global y política

No cabe duda de que la pandemia ha trastornado gran parte de nuestra arquitectura global y política, algo que queda patente en muchos de los capítulos del libro. El capítulo A1 sitúa gran parte de esta agitación en la continuación de tres tendencias "existenciales" anteriores a la pandemia: el aumento de las desigualdades económicas, el empeoramiento de los impactos ecológicos y los crecientes movimientos de personas que buscan alivio de la pobreza, los conflictos, el cambio climático o las tres cosas. La COVID-19 hizo imposible ignorar o desestimar la medida en que nuestra reciente historia de dominio neoliberal puso a gran parte de la humanidad en un peligro desigual. La ironía es que la capacidad del mundo rico para financiar públicamente muchas de sus empresas afectadas por la pandemia (si son lo suficientemente grandes) y su mano de obra (si están lo suficientemente cualificadas) creó tanto dinero nuevo en el espacio financiero mundial que quienes estaban en condiciones de capitalizarlo (la clase ya multimillonaria) se hicieron enormemente más ricos.

Durante un breve período, el colapso de las cadenas de suministro mundiales frenó o cerró enormes franjas de industrialización alimentada por combustibles fósiles, y el planeta respiró un poco de alivio momentáneo. Pero este alivio fue muy momentáneo, ya que el sexto informe de 2021 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático nos advierte de que sólo nos quedan unos pocos años para evitar un punto de inflexión catastrófico. Las políticas que se ocupan de los millones de personas en peligro por el clima, desplazadas por conflictos, que buscan refugio o que huyen de la pobreza, siguen sin proteger a los más vulnerables.

El capítulo ofrece algunas señales de cambio positivo. Tras el gasto de los países de renta alta (HIC) para mantener unidas sus economías y sociedades en los últimos dos años, por fin se habla de una reforma fiscal nacional y global. El nivel mínimo propuesto para el impuesto de sociedades global (15%) es demasiado bajo, las empresas podrían seguir esquivándolo y la mayor parte de los ingresos irán a parar a los países de renta alta. Pero es un comienzo. Sin embargo, se necesita desesperadamente un movimiento en los impuestos marginales sobre la renta y el patrimonio. ¿Por qué debería Jeff Bezos, de Amazon, (como otros multimillonarios superricos), poder evitar el pago de casi cualquier impuesto sobre la renta (Kiel, Eisinger, and Ernthausen 2021) y en su lugar construir un yate de medio billón de dólares (Pendleton and Stone 2021)? Los países se tropiezan unos con otros en su



afán por ser "verdes", e incluso si las medidas de economía verde son limitadas y, desde el punto de vista del ecosistema planetario, profundamente defectuosas, crean sin embargo plataformas de cambio que los activistas pueden aprovechar. Sin embargo, en nuestro mundo de apartheid de vacunas, cualquier beneficio potencial de estas iniciativas tardará en llegar a los desposeídos.

Este despojo también está fuertemente ligado al género, como describe el capítulo A2, centrado en las desigualdades de la pandemia. El género ha sido un tema en casi todas las *Vigilancias*, en gran medida en relación con los derechos sexuales y reproductivos; esto sigue siendo cierto en la presente. El capítulo A2, sin embargo, tiene cuidado de exponer la naturaleza múltiple e interseccional de las discriminaciones y opresiones de género. Se centra en las desigualdades de género de la pandemia en el Sur Global, particularmente en el sur de Asia, prestando atención a cómo el COVID-19 ha impactado desproporcionada y negativamente en las mujeres en sus roles de trabajadoras sanitarias, sociales y domésticas. Incorpora un análisis de la "pandemia en la sombra" de la violencia de género, extendiéndola a un espectro de identidades de género que va más allá de las mujeres cisgénero para incluir a las personas trans, intersexuales y no binarias, todas ellas más propensas a ser marginadas. También relata dos historias de activismo en materia de derechos de género: las campañas feministas para resistir el brusco giro a la derecha en Brasil, con un fuerte énfasis en la construcción de la ayuda mutua, y la exitosa campaña de la "ola verde" en Argentina, que llevó a la legalización del aborto voluntario hasta la semana 14th de embarazo. Frente a la dura oposición a la reforma del aborto por parte de la iglesia católica y los evangélicos de Argentina (entre otros), fue la persistencia y la movilización masiva de las feministas de la "ola verde" lo que condujo a un resultado exitoso "a favor del aborto" que seguramente se extenderá a los países vecinos con políticas más restrictivas.

La sección termina con un retorno a algunos de los temas señalados en el primer capítulo. Se pronostica un repunte del crecimiento económico, que los "economistas principales" estiman en torno al 6%. (Centre for the New Economy and Society 2021). El consumo aumentará de forma espectacular. Aunque se habla mucho de una "recuperación verde", hay poco compromiso firme para reducir las extracciones globales de recursos ecológicos. El capítulo A3 aborda esta cuestión con el provocador concepto de "decrecimiento", una reducción controlada del consumo humano total que somete al Norte Global (y a las élites del Sur Global) a una dieta estricta, esencial para crear un espacio de consumo en los países más pobres, donde ese crecimiento es necesario para crear vidas más saludables. El decrecimiento (lo que algunos prefieren llamar "crecimiento justo") requerirá una destronificación



radical del modelo económico intrínsecamente "consumista" del capitalismo, en el que el mantra de "crecimiento, crecimiento y crecimiento" se basa en la velocidad con la que se producen y consumen cosas nuevas, se gasta energía y se tiran las mercancías a la basura. Sin embargo, existen múltiples alternativas a este modelo que se están llevando a cabo a escala local, desde las alternativas a las métricas de crecimiento del capitalismo hasta las economías circulares, y desde las reformas del mercado laboral hasta el énfasis y la valoración adecuada del trabajo de "cuidado" que consume pocos recursos. Al igual que con el concepto indígena *del Buen Vivir* (que se encuentra en los *Relojes* anteriores y en los capítulos posteriores de esta edición), los esfuerzos para transformar un mundo de consumo excesivo e inequitativo surgirán, casi con toda seguridad, primero en aquellos espacios locales donde la gente vive en estrecha armonía con los demás y con un cuidado respetuoso de todos los seres vivos.

Sistemas sanitarios

Los cinco capítulos de nuestra segunda sección reducen el alcance del libro a la inmediatez de los sistemas de salud y al terreno de la mayoría de los activistas de la salud. En cada uno de los anteriores *Watch* se dedicó un tiempo considerable a desgranar una serie de cuestiones relacionadas con la prestación equitativa de servicios sanitarios de calidad para todos, invocando los principios de Alma-Ata y el toque de atención de "salud para todos". La primera *Vigilancia* nos recordó la importancia de los principios de Alma-Ata, y lo que significan para un enfoque de atención primaria de salud (APS). La cuestión pública/privada que subrayó (y los riesgos inherentes a la comercialización de la atención sanitaria) sigue vigente. Los siguientes *Observatorios analizaron* diferentes aspectos de estas cuestiones: la salud de los migrantes, la financiación del sistema sanitario, el problemático aumento de la cobertura sanitaria universal (CSU), la nueva gestión pública como "privatización encubierta" y el papel de la oposición de algunos Estados a un enfoque más centrado en el Estado (en lugar de en el mercado). Las experiencias de los países se destacaron con frecuencia, a menudo de forma crítica, pero también con relatos de cambio y lucha progresivos. El capítulo B1 de esta edición se basa en *los Observatorios anteriores* y ofrece un análisis en tiempo real de la situación mundial de los debates sobre la CSU y la APS, en el que se constata que la CSU está en todas partes y la APS se ha quedado en los márgenes. Se supone que los países de ingresos bajos y medianos deben generar su propia financiación interna (algo que la pandemia ha puesto en duda desde entonces), la retórica del mercado impregna la reforma de los sistemas sanitarios y el creciente discurso político mundial

sobre la participación del sector sanitario privado hace sonar las cajas registradoras de los inversores. El capítulo señala que la *idea* de la cobertura sanitaria universal no tiene nada de malo en sí misma, pero su enfoque en la financiación y su agnosticismo con respecto a las desventajas de aumentar el papel de los proveedores privados (pero siempre con el respaldo de la financiación estatal) ha conducido a una implementación de la cobertura sanitaria universal menos impresionante o equitativa. El futuro de la salud debe ser público, pero es el público activista el que debe hacerlo.

La importancia de la vigilancia y la oposición a la actual tendencia mundial a la privatización se presenta con crudeza en el capítulo B3, que sitúa la privatización de la atención sanitaria dentro de la incursión más amplia de la financiación privada y la prestación de servicios en la mayoría de los sectores de "bien público". El capítulo comienza relatando cómo los primeros años de privatización del sistema sanitario (y la consiguiente reducción de los presupuestos de salud pública preventiva) dejaron incluso a algunos de los países más ricos del mundo mal preparados para la COVID-19. De forma escalofriante, ilustra cómo la pandemia se convirtió rápidamente en un día de fiesta para los actores privados bendecidos con financiación pública para hacer cualquier cosa, desde gestionar hoteles de cuarentena, salas especiales de COVID-19 y aplicaciones de rastreo de contactos o, si ya operaban en el sector sanitario privado de un país, beneficiarse de los recargos por pandemia y/o de las generosas subvenciones de funcionamiento del gobierno (EE.UU. destaca en este sentido, pero no es ni mucho menos el único). Es posible que los centros sanitarios públicos o sin ánimo de lucro no siempre hayan hecho frente a la pandemia, pero en general han superado a los centros privados, especialmente a los que atienden a los adultos mayores, el grupo demográfico más temprano y aún más afectado por la COVID-19. A pesar de los elevados costes públicos que supone hacer frente a la pandemia, los gobiernos no tienen más remedio que reforzar de forma significativa sus sistemas sanitarios públicos. Como se señaló en el capítulo A1, hay riqueza mundial más que suficiente para hacerlo. Sólo que ahora está inmovilizada en manos privadas que no satisfacen ningún propósito público útil.

El capítulo B3 también describe brevemente algunas de las innovaciones que surgieron en las tecnologías digitales y de la información como resultado de la pandemia. El capítulo 2 de esta sección, intercalado entre los dos capítulos centrados en gran medida en la privatización de los sistemas sanitarios, introduce un nuevo tema de *Watch*: una exploración detallada de la revolución de la digitalización que afecta a la mayoría de los aspectos de la vida de las personas, incluida su salud. La "disrupción" de las tecnologías digitales (desde el Big Data y la vigilancia corporativa o estatal del Gran Her-

mano, hasta las preocupaciones apocalípticas o mundanas por el crecimiento de la Inteligencia Artificial) conlleva tanto beneficios como riesgos potenciales dentro de los sistemas sanitarios. Las tecnologías de la salud sólo habían recibido una atención pasajera en los anteriores *Observatorios*, por cuestiones de costes, control y confidencialidad o acceso equitativo a nuevos productos médicos. El capítulo B2 es la primera vez que un *Observatorio* profundiza en la forma en que esta tecnología está (o podría estar pronto) reformando los sistemas sanitarios. Reconoce los posibles beneficios de la tecnología digital (más "medicina personalizada", mejores resultados sanitarios, reducción de costes, mejor calidad de la atención, "pacientes" empoderados), aunque encuentra una escasa evidencia de los mismos, al menos por ahora. Examina de forma más crítica sus complejas desventajas para la privacidad, desde el aumento del "capitalismo de la vigilancia" y la propiedad y el lucro de las grandes empresas tecnológicas, hasta el riesgo de afianzar una profunda "brecha digital" mundial. También detalla cómo la pandemia está incentivando unas relaciones cada vez más estrechas entre los gobiernos y los gigantes tecnológicos, ya que estos últimos ven que surgen nuevas oportunidades en el mercado de la salud a raíz de COVID-19. Esto lleva al capítulo a advertir que la gobernanza digital va demasiado a la zaga de la innovación digital, señalando el reto al que se enfrentan los movimientos activistas digitales de "código abierto" en sus esfuerzos por impedir que las empresas reclamen en monopolio lo que debería considerarse un bien público mundial, con la justicia como núcleo.

Esta preocupación por los derechos de monopolio es el núcleo del capítulo B4, y un retorno a uno de los retos del sistema de salud que *los Watches presentan con* más frecuencia: el papel de la protección de los derechos de propiedad intelectual por parte de los acuerdos comerciales en la creación de barreras en el acceso a los medicamentos. El capítulo actualiza el lamentable estado del acceso (para los grupos o países de bajos ingresos, los costes de los medicamentos siguen siendo el mayor gasto sanitario de bolsillo) con la pandemia del COVID-19, que aumentó drásticamente las desigualdades en el acceso a los medicamentos (y especialmente a las vacunas). Los países de altos ingresos no sólo se hicieron con el suministro de vacunas en sus compras anticipadas en el mercado, sino que hicieron lo mismo con la mayoría de los productos médicos (tratamientos, diagnósticos). Una de las causas fundamentales es el régimen mundial de derechos de propiedad intelectual (DPI), desarrollado por primera vez en el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y reforzado después en los acuerdos comerciales bilaterales y regionales. El capítulo repasa la chabacana historia de las grandes farmacéuticas que se niegan a compartir

sus patentes o tecnologías de vacunas (a pesar de que gran parte de los costes de las vacunas se financian con fondos públicos o se garantizan a través de los acuerdos de compra anticipada de los gobiernos) y los esfuerzos de los PBI y los PIM, liderados inicialmente por Sudáfrica e India, para presionar por una exención temporal de las normas clave de los ADPIC para facilitar la rápida ampliación de las vacunas. Fueron necesarios 8 meses de campaña (de octubre de 2020 a mayo de 2021) para iniciar las negociaciones "basadas en el texto" para una exención, cuyo alcance y posibilidades de éxito son aún discutibles. Las grandes empresas farmacéuticas siguen oponiéndose, la Unión Europea no cree que la exención sea necesaria, y los Estados Unidos (cuyo acuerdo para considerar una exención en mayo de 2021 provocó algunos avances) la restringe a las vacunas y sólo a las patentes (véase el capítulo B4). Una exención de los ADPIC no resolverá por sí misma y de forma inmediata el acceso desigual a las vacunas o a los productos sanitarios COVID-19, aunque es un comienzo; y hay otras preocupaciones regulatorias en los regímenes de propiedad intelectual ADPIC y "ADPIC-Plus". No obstante, la campaña por la exención ha proporcionado a los activistas de la salud de todo el mundo un momento de encuentro y una plataforma de defensa con el potencial de crear cambios más fundamentales en la propiedad, el control y la gestión de los "bienes comunes del conocimiento".

Mientras tanto, el suministro de vacunas sigue siendo críticamente bajo mientras se acumulan los beneficios de las empresas por las ventas de la primera oleada a los países de ingresos altos, cuyo ejemplo más público es el de Pfizer. Según ha reconocido a sus accionistas, Pfizer espera generar este año 33.000 millones de dólares en ventas de vacunas, con unos beneficios cercanos al 30% ("high 20s"), es decir, unos 10.000 millones de dólares, sin contar lo que ganará con las vacunas de "refuerzo". Los impuestos que Pfizer paga sobre sus beneficios son de una media de sólo el 5,8%, debido a su práctica de eludir impuestos mediante la creación de cientos de empresas "buzón" en países con paraísos fiscales. En virtud de las normas de los tratados ADPIC y de la actual legislación fiscal internacional, Pfizer puede alegar que sólo hace lo que le está permitido ("Pfizer Using Dutch Letterbox Company to Avoid Taxes: Report" 2021). Moderna, que produce la otra vacuna de ARNm, no está mejor, con unos beneficios en 2021 de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares sobre sólo 18.400 millones de dólares en ventas. Los beneficios se mantendrán en uno de los dos "paraísos fiscales" de baja tributación: el estado de Delaware en los Estados Unidos y Suiza en la UE (Kiezebrink 2021). Si este comportamiento legalmente permisible es éticamente permisible o no, es otra cuestión.

El último capítulo B5 de la sección aborda una cuestión que adquiere una importancia creciente en la pandemia: la salud mental. Las secuelas psicosociales del COVID-19 se consideran cada vez más como uno de sus retos sanitarios de larga duración, especialmente para los más jóvenes, cuyos años de mayor socialización se han visto truncados por los cierres patronales, el cierre de escuelas y un futuro incierto. Los *Observatorios* anteriores examinaron fragmentos de los problemas de salud mental asociados a las desigualdades sociales, las consecuencias de la crisis financiera de 2008 y las críticas a la tendencia de la biomedicina occidental a tratar con fármacos cualquiera de su floreciente lista de "enfermedades mentales". Este último tema se recoge en el presente capítulo que, aunque reconoce algunos de los beneficios que la biomedicina aporta a la salud mental, analiza la importancia de la prevención primaria (abordar los determinantes de la mala salud mental a nivel de sistemas) y ampliar el uso de alternativas terapéuticas a los fármacos y la institucionalización, como las intervenciones psicosociales de los trabajadores sanitarios de primera línea y las redes de apoyo entre iguales. Estrategias como éstas tienen el potencial de superar la preocupante escasez de trabajadores de la salud mental, otro déficit flagrante del personal sanitario mundial descrito en el capítulo B1 que refuerza el argumento del capítulo A3 de invertir en una recuperación pospandémica basada en una "economía asistencial".

Más allá de la asistencia sanitaria

Hace tiempo que se sabe que la salud está determinada por mucho más que los sistemas de salud, aunque sea un conocimiento eclipsado por el dominio de la biomedicina occidental durante gran parte del siglo pasado. Los seis capítulos de este *Observatorio* continúan el enfoque de la serie en lo que comúnmente se conoce como determinantes sociales de la salud, pero que puede describirse más críticamente como los sistemas jerárquicos, de género, racializados y económicamente estratificados de opresión y marginación social que crean riesgos de salud inequitativos.

El capítulo C1 vuelve a tratar una cuestión a la que se prestó mucha atención en la disección de la agenda de austeridad del *Observatorio 4*, que globalizó los yugos fiscales de anteriores programas de ajuste estructural que el mundo rico había considerado esencial que siguieran las naciones más pobres para preservar la liquidez de sus propios privilegios financieros. Las consecuencias económicas de la pandemia, al igual que las de la crisis financiera de 2008, parecen destinadas a orquestar una repetición. A pesar de un cambio de retórica en la cúpula (sobre todo en el Fondo Monetario Internacional), los shibboleths políticos del neoliberalismo siguen dominando

los consejos que ofrece en todo el mundo (y que los PBMI dependientes de la ayuda crediticia toman como obligatorios), como si los compromisos adquiridos en los ODS de 2015 y el Acuerdo de París no exigieran un replanteamiento económico radical. El activismo de la sociedad civil se enfrentó con éxito a los recortes de la austeridad en varios países de renta alta, pero no ha sido así en la mayoría de los países de renta media, a pesar de las oleadas de protestas contra la austeridad en todos los continentes. Después de haber preparado el terreno para los resultados sanitarios tan desiguales de la pandemia, la austeridad se reinventa ahora como una prudencia fiscal necesaria para reducir las profundas deudas públicas de los gobiernos creadas por la COVID-19. Hasta 4 de cada 5 países están en retroceso fiscal, reduciendo su gasto público como porcentaje de su ya reducido PIB, incluso mientras la tercera y la cuarta oleada de la pandemia siguen golpeando las vidas y los medios de subsistencia de las personas. El capítulo identifica importantes opciones para invertir este curso, similares a las señaladas en el capítulo A1. Algunas de ellas ya son habituales en algunos países, mientras que otras más nuevas se están llevando a cabo con lentitud, y todas requieren un "marco macroeconómico más acomodaticio". Cualquiera que sea ese marco, debe atender a la agenda de ecojusticia (decrecimiento) que se discute ampliamente en el capítulo A3.

También tendrá que prestar atención a los mercados laborales mundiales, que siguen siendo turbulentos, y en los que todos los trabajadores, salvo un pequeño número de los altamente cualificados (en general, basados en la tecnología), siguen enfrentándose a una disminución de sus ingresos, a la inseguridad del empleo, a la pérdida de las prestaciones de la seguridad social y a una participación cada vez menor en el pastel económico mundial. Los acuerdos laborales informales no son nada nuevo, especialmente en los países de ingresos bajos y medios, cuyas oportunidades de empleo (aunque sean explotadas) mejoraron con la globalización y la subcontratación. Pero se están convirtiendo en la norma mundial, con una economía "gig" impulsada por aplicaciones y plataformas laborales que transforman a un número cada vez mayor de trabajadores en trabajadores "justo a tiempo (parcial)". El capítulo C2 concluye que la COVID-19 está empeorando una mala situación, incluso si algunos países de renta media que están alcanzando la inmunidad de rebaño nacional de la vacuna y reiniciando sus economías están viendo una inversión de sus pérdidas iniciales de empleo de la pandemia. Los trabajadores del sector de bajos salarios fueron los que salieron peor parados (no es de extrañar), al igual que los trabajadores a tiempo parcial y los que trabajan en sectores de alto riesgo (agricultura, industria manufacturera, servicios alimentarios) y, como se ha documentado en el capítulo A2, la atención sanitaria. El aspecto de género de las perturbaciones pandémicas de la rece-

sión ha llevado a algunos a llamarla "shecession", ya que las mujeres son las que sufren los golpes más duros del mercado laboral y tienen menos probabilidades que los hombres de volver a trabajar. No ha faltado el activismo laboral en respuesta a las inseguridades sociales y de salud en el lugar de trabajo, tanto antes como después de la pandemia, con un saludable aumento de las campañas de sindicalización. Pero como es probable que los mercados laborales sigan sufriendo la presión de la globalización, que ha deshecho la era anterior del contrato social entre el gobierno, el trabajo y el mercado, se está prestando más atención al concepto de las transferencias monetarias incondicionales: una renta básica universal, financiada por los impuestos, garantizada como un derecho de los ciudadanos. Aunque no son una panacea ni sustituyen a una normativa laboral más estricta, estas transferencias vinculan con más fuerza la lucha por el "trabajo decente" con el impulso de crear "pisos de protección social" para todos.

Una de las preocupaciones de la derecha con respecto a las transferencias monetarias incondicionales es que los pobres, con más dinero en sus bolsillos, lo gastarán de forma poco saludable en cigarrillos, comida basura y alcohol. No hay pruebas que respalden esta asociación con dichas transferencias de efectivo, pero la preocupación por los "determinantes comerciales de la (mala) salud" está justificada, como documenta el capítulo C3. Puede que el COVID-19 haya reafirmado nuestras susceptibilidades humanas a las nuevas infecciones, pero lo que la OMS llama el "desastre en cámara lenta" de las enfermedades no transmisibles (ENT) no ha perdido su importancia duradera. Además, los "factores de riesgo" de las ENT son tan transmisibles como los de las enfermedades infecciosas, en gran medida como resultado de la difusión mundial de "productos básicos insalubres" producidos y comercializados por empresas transnacionales que acumulan capital. El capítulo repasa algunas de las conocidas estrategias desplegadas por las industrias del tabaco, los alimentos obesogénicos y el alcohol para promover sus intereses (marketing, grupos de presión, litigios y la cortina de humo de la responsabilidad social corporativa), pero las actualiza con una mirada a cómo la pandemia ha creado nuevos nichos digitalizados para su suministro. Los tratados de comercio e inversión aplicables siguen siendo potentes barreras para los esfuerzos de los activistas por reducir la propagación de estas "mercancías insalubres", aunque se han conseguido algunos éxitos en la limitación de sus daños desreguladores, principalmente en lo que respecta a las medidas de control del tabaco. A pesar de la amplia oposición de las empresas, y con el apoyo de una fuerte movilización de la sociedad civil y de la defensa de la salud pública, cada vez más gobiernos están recurriendo a políticas de etiquetado e impuestos para restringir el consumo de productos perjudiciales para la salud.

En última instancia, y sobre todo en lo que respecta a la producción y el consumo de alimentos saludables, la gobernanza nacional y mundial debe prestar mayor atención a la protección de la salud de nuestro patrimonio medioambiental. En todas las ediciones anteriores *del Observatorio* se ha comentado el estado de deterioro de nuestra salud planetaria y, con ello, los riesgos futuros (de hecho, ya actuales) para nuestra salud humana. El cambio climático, la pérdida de agua y las industrias extractivas han aparecido en ediciones anteriores y siguen estando presentes en muchos de los capítulos de esta edición. Las industrias extractivas son el tema dominante en el capítulo C4, en el que se entretajan de forma convincente los relatos de múltiples países y colaboradores que forman parte del círculo de Medio Ambiente y Salud del Movimiento por la Salud de los Pueblos (MSP). Apuntan al propio concepto de desarrollo y a su dependencia de las interminables extracciones de los llamados "recursos naturales", un fenómeno acelerado por los gobiernos de derechas pero que tampoco es ajeno a los supuestamente de izquierdas. El capítulo comienza contrastando la visión del mundo del desarrollo del capitalismo con la del *Sumak Kawsay*, la filosofía indígena de Ecuador, también conocida como *Buen Vivir* y común a la filosofía de muchos pueblos indígenas latinoamericanos. Varios de los nueve estudios de caso del capítulo se refieren a la minería, mientras que otros se centran en el agua (y los derechos sobre el agua), los impactos del cambio climático en función del género, el aumento tóxico de la agroindustria y las continuas luchas para defender las regiones del planeta habitadas por los indígenas y la biodiversidad contra los ataques comerciales rapaces y los gobiernos cómplices. Al destacar el alcance y la intensidad de la oposición de los activistas a la patología inherente al extractivismo, el capítulo no minimiza el alcance del daño que sigue fomentando el mito del "desarrollo" del extractivismo. Pero es claro en cuanto a la necesidad de desafiarlo, y algunos de los medios para hacerlo.

En el capítulo C5 se expone un argumento similar, que reúne los temas de los dos anteriores: los alimentos poco saludables (industrializados) y la extracción insostenible de los recursos ecológicos del planeta. El argumento del capítulo es sencillo: el sistema alimentario mundial está roto. Contamina, consolida el control en unos pocos oligopolios y arrasa con la tierra necesaria para la producción, al tiempo que no logra satisfacer la necesidad mundial de alimentos sanos y nutritivos. El capítulo se basa en los *Observatorios anteriores* que exploraron las raíces de la malnutrición para algunos y la sobre-alimentación para otros, el crecimiento de la inseguridad alimentaria, la creciente dependencia de las tecnologías corporativas para compensar los alimentos desnutridos y la necesidad de proteger el derecho de las comunidades a la soberanía alimentaria. El capítulo profundiza en la historia del



modelo agroindustrial dominante, contrastándolo con las alternativas agroecológicas que han persistido a pesar de la actual corporativización de la agricultura. Encuentra pruebas considerables de la capacidad de la agroecología para satisfacer tanto las necesidades alimentarias humanas como la sostenibilidad planetaria, y cita ejemplos alentadores. El COVID-19 ha hecho retroceder algunas de estas iniciativas: los alimentos procesados de larga duración y envasados parecían más seguros que los mercados locales de alimentos en una "nueva normalidad" restringida por la movilidad y con más caras. Pero el trabajo de movilización para dar forma a una transformación de los sistemas alimentarios mundiales sigue creciendo a través del Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas (MSC) que forma parte del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU. Una coyuntura crítica a corto plazo será la medida en que la agroecología pueda impedir que las soluciones técnicas/corporativas y los intereses económicos que las sustentan dominen la gobernanza alimentaria mundial.

La sección se cierra con el capítulo C6, que pone una nota sombría sobre el estado de los conflictos mundiales y las perspectivas de revitalización del movimiento mundial por la paz. La riqueza y los recursos consumidos por lo que en su día denominamos "complejo militar-industrial" se vuelven más absurdos en un contexto de agudas necesidades sanitarias y sociales mientras el mundo intenta superar sus crisis pandémicas. El capítulo nos recuerda la magnitud de la carnicería sanitaria perpetrada en dos de las peores zonas de conflicto del mundo (Yemen y Siria), agravada por el COVID-19, y cómo estas guerras por delegación son suscritas por intereses estatales y comerciales en el comercio de armas. Describe cómo la islamofobia, en parte al amparo de la pandemia, está sembrando lo que muchos activistas consideran genocidios; y constata que demasiados países están "armando" el COVID-19 en sus respuestas, con autocracias que parecen dispuestas a desafiar a las democracias en muchas de las regiones del mundo. Pero también hay elogios para la reforma: el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares que entró en vigor en enero de 2021, el aumento de la "paz desde abajo" (las iniciativas de base para construir las condiciones para la paz y la cohesión social), y el destacado papel que desempeñan las mujeres en muchos de estos esfuerzos.

Ver

La idea misma de un *Observatorio Mundial de la Salud* es "observar": observar, estudiar, analizar e interrogar a las fuerzas globales que dan lugar a las posibilidades de la salud, a través de sus efectos en las vías sociales y ambientales hacia la salud, y su papel en el logro de una mayor (o menor)



equidad en esas posibilidades. Los temas que recorren esta sección pueden resumirse en dos palabras (gobernanza global) y la amenaza a su responsabilidad democrática (el creciente poder de las élites económicas y empresariales del mundo). En ausencia de un gobierno global (fuera de las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU que pueden ser respaldadas por la fuerza), tenemos una pluralidad creciente de plataformas de gobernanza de múltiples partes interesadas. Los gobiernos (elegidos o no) se sientan en torno a estas mesas de toma de decisiones colectivas, pero poco a poco se ven superados por los actores privados, los súper ricos "filantropistas" y el sector empresarial, de cuya riqueza y poder depende cada vez más nuestro sistema de agencias intergubernamentales de la ONU.

El capítulo D1 marca la pauta con su crítica exculpatoria del papel decreciente de la OMS como agencia sanitaria mundial. Esto no es nuevo y ha sido una característica en varios *Vigilantes*. Pero la situación se agrava, ya que la financiación de la OMS procede en escasa medida de las "contribuciones señaladas" sobre las que, a través de la Asamblea Mundial de la Salud (AMS), tiene control del gasto. Sus funciones programáticas dependen ahora sólidamente de unos pocos países ricos y de donantes privados adinerados, lo que da a estos donantes derechos privilegiados para fijar la agenda por encima de los de la AMS, más representativa. El déficit de financiación de la OMS también está detrás de algunos de sus tropiezos en los primeros meses de la pandemia, en los que, al igual que sus Estados miembros más ricos, las lecciones de preparación ante el SARS y otras pandemias amenazantes no se vieron acompañadas de finanzas protegidas en caso de que estallara una nueva "emergencia de salud pública de interés internacional" (PHEIC). La respuesta global a COVID-19, en cambio, recayó en una asociación público-privada (APP), el Acelerador de Acceso a las Herramientas de COVID-19 (ACT-A), en el que la OMS participa pero no lidera. Creada en gran medida siguiendo el diseño y la financiación suministrados por Bill Gates, es un modelo que se niega a desafiar los intereses corporativos (principalmente los monopolios de los derechos de propiedad intelectual de las grandes farmacéuticas que se analizan en el capítulo B4) y que hasta ahora no ha logrado remediar la tragedia evitable del apartheid de las vacunas. El hecho de que una mirada posterior a la pandemia conduzca a otra ronda de revisiones del Reglamento Sanitario Internacional o a un nuevo Tratado sobre Pandemias es discutible; la necesidad de que los estados miembros de la OMS aumenten proporcionalmente sus contribuciones asignadas no lo es. La magnitud de la crisis de financiación de la OMS se hace más evidente en la creación en 2020 de su propia Fundación, dirigida por un antiguo director general de las grandes farmacéuticas, que está buscando donaciones de empresas y particulares cuyo retorno de la inversión proporcionaría a la OMS al-



gún nuevo capital de trabajo. El hecho de que este modelo inscriba a la OMS en el mismo sistema global financiado que ha contribuido a crear el aumento de las desigualdades de ingresos y de riqueza señaladas en el capítulo A1 es una ironía que ha pasado desapercibida para la mayoría.

La tríada financiación/gobernanza mundial/privatización se repite en los capítulos posteriores de la sección. El capítulo D2, sin embargo, dirige su mirada reprobatoria a una faceta diferente de la gobernanza: las normas de comercio e inversión aplicables que han dado forma a la economía mundial (y a los bienes comunes medioambientales) durante al menos el último cuarto de siglo. Se centra en el abandono del multilateralismo de la OMC y en la tendencia a los acuerdos comerciales bilaterales o regionales que, prácticamente por definición, son más que la OMC. Los nuevos tratados a los que dedica algún tiempo a evaluar sus nuevas amenazas potenciales para la salud pública son el CPTPP (Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífica) y el USMCA (Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá). Ambos refuerzan las medidas políticas que los gobiernos podrían tomar y que podrían inhibir el comercio, con nuevas reglas sobre cómo deben desarrollarse las futuras regulaciones, incluyendo el permitir o incluso obligar la participación de actores corporativos de otros países. La mejora de la coherencia reglamentaria entre los países que comercian puede no ser algo "malo", pero depende de si esa coherencia se basa en la equidad sanitaria, los derechos laborales y los resultados de la protección del medio ambiente. A pesar de la inclusión de nuevos capítulos sobre trabajo y medio ambiente en algunos acuerdos bilaterales y regionales, estos pueden evitar (o al menos ralentizar) una "carrera hacia abajo", pero difícilmente suponen un "alcance hacia arriba" empoderador, aunque el capítulo laboral del USMCA tiene cierto potencial en favor de los trabajadores, especialmente para los trabajadores de las fábricas mexicanas que alimentan el sector industrial de Estados Unidos. El aspecto más preocupante de estos tratados reside menos en el comercio y más en la inversión. Los tratados internacionales de inversión se han convertido en una de las formas más depredadoras del capitalismo financiarizado, en el que los inversores especulativos, los bufetes de abogados y las empresas transnacionales mantienen a los gobiernos (y a las personas a las que representan) como rehenes de las normas de un tratado vagamente redactado y de los procedimientos secretos de los tribunales. Lo último: esfuerzos en curso, o planeados, para demandar a los gobiernos fiscalmente cuestionados por sus paquetes de rescate de la pandemia por las medidas de salud pública que tuvieron que imponer, ya que dichas medidas pueden haber interferido con la rentabilidad proyectada de sus inversiones.

El capítulo señala algunas oportunidades en la capacidad de la salud para influir en las negociaciones de los tratados de comercio e inversión,



aunque la lógica económica subyacente (y todavía en gran medida neoliberal) siga prevaleciendo. La OMC es una pequeña parte del sistema de gobernanza mundial, aunque sus normas de resolución de conflictos la convierten en una de las más poderosas. La ONU es una red mucho más amplia de organizaciones intergubernamentales encargadas de una enorme variedad de tareas, muchas de las cuales, como la OMS, se ocupan del lado de la protección social del equilibrio entre economía y sociedad. Como relata el capítulo D3, esta red de posguerra ha estado tan gravemente desfinanciada como la OMS desde los años 90, la misma década en la que la ortodoxia económica neoliberal se había vuelto tan dominante que algunos anunciaron (aunque prematuramente) el "fin de la historia". El capítulo es especialmente crítico con los esfuerzos de la ONU por hacerse la simpática con las empresas transnacionales para acceder a su apoyo financiero. Jugar limpio se traduce en un "pacto global" inaplicable que da mucho más crédito al culto de la "responsabilidad social corporativa" (RSC) que a las pruebas de RSC que merecen algún reconocimiento. Un avance más positivo, impulsado por la continua presión de la sociedad civil, son los esfuerzos por crear un tratado vinculante sobre las obligaciones de las empresas transnacionales en materia de derechos humanos. No es de extrañar que la oposición a este tratado por parte de quienes lo regirían sea feroz, pero la pandemia podría darle el empujón que necesita para cruzar la línea de meta de las negociaciones. Pero hasta que no haya un nuevo "pacto de financiación" para apoyar las funciones básicas de las agencias de la ONU (incluida la que supervisa el cumplimiento de los tratados de derechos humanos por parte de los Estados), los poderosos intereses económicos seguirán infiltrándose en lo que sigue siendo el esfuerzo más duradero de la gobernanza mundial para la paz.

El capítulo D4 se centra en dos organizaciones mundiales cuya gobernanza ha sido cuestionada durante mucho tiempo: el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). La preocupación por las políticas y prácticas de ambos se planteó en capítulos anteriores. Tal y como se ha comprobado en el capítulo D4, el lenguaje del ajuste estructural puede haber desaparecido, pero sus premisas básicas simplemente se han reformulado. El BM intercambia los tropos neoliberales por la idea de "capital humano", en la que al menos la importancia de invertir en salud y educación adquiere relevancia tras los ODM, pero menos como fines en sí mismos y más como medios para ese eterno favorito: mejorar el crecimiento económico. Su proyecto de capital humano está vinculado a sus políticas destinadas a mejorar las oportunidades de negocio y encaja cómodamente con su brazo de préstamos al sector privado, la Corporación Financiera Internacional, y su estrategia de "construir mercados" y posicionar el crecimiento del



sector privado como una prioridad post-pandémica. Sin embargo, la dinámica interna del BM y del FMI entra en cierta contradicción, ya que su reunión conjunta de 2020 estuvo repleta de referencias a la "inversión en las personas". La contradicción radica en la procedencia de esa inversión: ¿otra ronda de bonos de inversión social (esperemos que se aprenda de la excesiva generosidad de capital concedida por los fallidos bonos para la pandemia), más asociaciones público-privadas o, en el caso del FMI, derechos especiales de giro (DEG) más generosos para los PBMI (que los países pueden utilizar como consideren oportuno, pero no sin el "asesoramiento político del FMI... para garantizar que los países no pospongan los ajustes y reformas macroeconómicas necesarios" (Fondo Monetario Internacional 2021))? Ambas instituciones han entregado fondos a los gobiernos de los países de ingresos bajos y medios para ayudarles a hacer frente a la COVID-19, incluido el BM que ha aportado dinero a la iniciativa de la vacuna COVAX. Sin embargo, es decepcionante que el BM (o al menos su director general nombrado por Estados Unidos) se oponga a la exención de los ADPIC.

Tanto el FMI como el BM parecen ser conscientes del riesgo de rebelión social generalizada y de colapso gubernamental a menos que se realicen esfuerzos para acabar con la pandemia de forma rápida y justa. Esto adquiere mayor importancia si se tiene en cuenta que, mientras los países de renta alta salen primero de la pandemia, su crecimiento económico experimentará un lento repunte, al tiempo que la especulación en los mercados inmobiliarios y financieros sigue inflando una burbuja masiva de tamaño histórico. El resultado neto de ambas tendencias es un probable fin o ralentización de la era pandémica del "dinero barato", el aumento de las medidas de ayuda de COVID-19, el gasto de estímulo post-pandémico y el aumento de la oferta monetaria a través de la teoría monetaria moderna. Como se advirtió en el Capítulo A1, los países ricos que pudieron permitirse estas políticas se disponen ahora a aumentar los tipos de interés para minimizar los riesgos de inflación. Es probable que su endurecimiento de las condiciones monetarias desencadene importantes crisis de deuda en muchos países de renta baja que ya estaban (de nuevo) endeudados antes de la pandemia y que ahora lo están aún más. Si esas crisis se afrontan (de nuevo) con medidas de austeridad, como parece probable, es probable que aumente el malestar social en todo el mundo, junto con las respuestas autocráticas de los gobiernos.

El capítulo D5, que cierra la sección, presenta una crítica mordaz de lo que denomina nuestra actual era de impunidad empresarial. Algunos temas se repiten de otros capítulos (en particular, una mirada más profunda a las negociaciones para un tratado vinculante sobre las empresas transnacionales y los derechos humanos, y una revisión de los delitos corporativos y las resistencias de la comunidad desde la década de 1990), pero su

argumento principal es cómo el "Gran Reajuste" post-pandémico del Foro Económico Mundial (FEM) está a punto de anclar el capital privado y el gobierno corporativo en el corazón del sistema de la ONU. Los lectores *de Watch* probablemente estén familiarizados con el FEM, la fiesta anual de la élite empresarial, financiera y (ocasionalmente) académica que se reúne generalmente en Davos, Suiza. El fundador del FEM, Klaus Schwab, lleva varios años predicando el evangelio de la multiplicidad de partes interesadas y lo que él denomina "capitalismo de las partes interesadas", en el que las empresas redefinen su papel, pasando de maximizar el valor para los accionistas a uno que (con ecos de la RSC) reconoce sus responsabilidades para con sus trabajadores, sus clientes y sus comunidades. Por desgracia, el comportamiento pasado no augura nada bueno para ese "Reset", y los activistas están más que preocupados por que se convierta en otra hoja de parra para un negocio descalificador como el de siempre. La preocupación inmediata expresada en este capítulo es la lenta integración del FEM en las estructuras de gobernanza de la ONU, lo que refuerza el inquietante solapamiento de los intereses de las empresas y el capital con los pocos sistemas de gobernanza mundial más democráticos.

Este final bastante sobrio de la sección nos permite reflexionar en el último capítulo sobre el potencial de la oposición activista y de un giro post-pandémico verdaderamente transformador. No somos lo suficientemente ingenuos o acríticamente idealistas como para ignorar cómo, incluso antes de la pandemia y ahora bajo su sombra, los regímenes autocráticos están reprimiendo cada vez más la protesta pública. La democracia (especialmente en su forma liberal occidental) nunca ha sido un sistema perfecto; y el ascenso de China a nivel mundial bajo un régimen capitalista de Estado que no pretende ser democrático crea un desafío particular para aquellos movimientos de la sociedad civil cuya capacidad de agitación, acción y defensa está, al menos, protegida por las normas democráticas legales. Tanto si nos atenemos a la idea "glocalizada" del capítulo A3 de un futuro pospandémico de decrecimiento, en el que nuestras obligaciones sociales y medioambientales mutuas se promulgan a una escala más humana, como si nos atenemos a una visión socialista revitalizada de la gobernanza y el gobierno en múltiples niveles, implícita en los capítulos que abarcan esta edición, la necesidad de seguir "diciendo la verdad al poder" -de hecho, de gritar sabiduría a los que no escuchan voluntariamente- sigue siendo la fuerza que alimenta nuestra animadversión activista.

Hacerlo en medio de los crecientes desafíos del activismo es el tema de nuestro capítulo final, que hace hincapié en algunas de las lecciones aprendidas en dos décadas de organización y campaña de "Salud para todos" del MSP. Se basa en primer lugar en un estudio reflexivo sobre el tra-



bajo del PHM, una autoevaluación ante los numerosos activistas de todo el mundo que defienden su nombre y sus objetivos visionarios. Con la participación de decenas de activistas de todo el mundo, el estudio sintetiza varios principios extraídos de la práctica y cómo éstos se reflejan en los esfuerzos futuros previstos por el MSP. Recapitula varios de los ejemplos fundamentales de estos principios en acción que aparecen en los capítulos de esta edición del *Observatorio*. Un tema clave es el de la convergencia: "la unión de personas, organizaciones y movimientos que comparten preocupaciones similares sobre la salud y son críticos con el papel que desempeña la globalización neoliberal en el mantenimiento de las desigualdades sanitarias". No hay certeza de que esa convergencia vaya a crear el mundo ecojusto que impulsa los esfuerzos de la mayoría de los movimientos sociales progresistas. Pero estos esfuerzos son tanto fines en sí mismos como medios esenciales para nuestro futuro más saludable; y esta edición, como todas las anteriores *de Watches*, es un modesto intento de honrarlos.

Por último, los colaboradores se han esforzado por mantener sus capítulos lo más actualizados posible, dado el rápido cambio del panorama sanitario mundial. Los capítulos se completaron por primera vez a finales de junio de 2021, y la mayoría se actualizaron a mediados de septiembre de 2021. Aunque gran parte de su contenido va más allá de los problemas inmediatos de salud mundial, los lectores deben tener en cuenta que algunos de los datos o acontecimientos descritos reflejan información y análisis actuales hasta septiembre de 2021.



Referencias

- Centro para la Nueva Economía y Sociedad. 2021. "Perspectivas de los economistas jefe, junio de 2021". Suiza: Foro Económico Mundial.
- Kiel, Paul, Jesse Eisinger y Jeff Ernsthausen. 2021. "Los archivos secretos del IRS: Trove of Never-Before-Seen Records Reveal How the Wealthiest Avoid Income Tax". ProPublica. 8 de junio de 2021. <https://www.propublica.org/article/the-secret-irs-files-trove-of-never-before-seen-records-reveal-how-the-wealthiest-avoid-income-tax>.
- Kiezebrink, Vincent. 2021. "El viaje gratis de Moderna". SOMO. 13 de julio de 2021. <https://www.somo.nl/modernas-free-ride/>.
- Fondo Monetario Internacional. 2021. "Preguntas y respuestas sobre los derechos especiales de giro (DEG)". FMI. 23 de agosto de 2021. <https://www.imf.org/en/About/FAQ/special-drawing-right>.
- Pendleton, Devon, y Brad Stone. 2021. "El nuevo superyate de Jeff Bezos anuncia un mercado en auge para los grandes barcos". Bloomberg Wealth, 7 de mayo de 2021. <https://www.bloomberg.com/news/features/2021-05-07/jeff-bezos-s-new-superyacht-heralds-roaring-market-for-big-boats>.
- "Pfizer utiliza una empresa holandesa de buzones para evitar impuestos: Informe". 2021. NL Times. 11 de mayo de 2021. <https://nltimes.nl/2021/05/11/pfizer-using-dutch-letterbox-company-avoid-taxes-report>.

Notas

i Para acceder a la Carta de la Salud de los ciudadanos, visite <https://phmovement.org/the-peoples-charter-for-health/>.